

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-5380-2022
CARATULADO	: RUIZ-TAGLE/FISCO DE CHILE - C.D.E.

Santiago, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Al folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en pasaje Doctor Sotero del Río N° 326, oficina 1104, comuna y ciudad de Santiago, en representación convencional de don **Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco**, jubilado, domiciliado en avenida Pedro Montt, pasaje Cóndor N°50, comuna y ciudad de Valdivia, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente en esta jurisdicción por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, todos con domicilio en calle Agustinas N° 1.225, piso 4, comuna y ciudad de Santiago.

Fundamentando su solicitud, señala que la demandante ha sido reconocida como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech I, incluida en el numeral 21.815 de la nómina de víctimas reconocidas por dicha comisión.

Incorpora un relato en primera persona de los hechos sufridos por el actor, que indica que para la época de los hechos era líder del Movimiento de Acción Popular Unitaria, conocido como MAPU, y vivía con su cónyuge e hijos en la ciudad de Valdivia.

Refiere que el día 19 de septiembre de 1973, personal de Carabineros de Chile ingresó a su domicilio con el objeto de detenerle, siendo llevado a la prefectura de Valdivia, luego al cuartel de la Cuarta División del Ejército y al Regimiento Caupolicán, y posteriormente



trasladado a la cárcel de Isla Teja, lugar en el que permanecí detenido hasta el día 24 de noviembre de 1973.

Expone que fue detenido nuevamente el día 6 de diciembre de 1973, mientras se encontraba en su domicilio, trasladándolo al cuartel de la Policía de Investigaciones en Valdivia, y luego a la Fiscalía Militar de Puerto Montt, donde estuvo en una celda subterránea, en la cual permaneció más de tres meses, cerca de la celda en que torturaban.

Relata que un día lo sacaron de dicha celda, le vendaron los ojos y ataron sus manos a la espalda con restos de una bandera del MAPU, lo tiraron sobre una colchoneta, siendo golpeado con puños y pies, además, le pusieron un cable eléctrico en la cabeza y en los genitales mientras le interrogaban, y al no recibir respuesta le golpearon y le aplicaron corriente.

Reseña que cuando la tortura cesó, le arrastraron hasta una celda en donde le dejaron vendado y amordazado, tendido boca abajo, siendo desatado horas después y liberado el 13 de junio de 1975.

Afirma que el hecho represivo vivido le trajo diversas consecuencias, como que al salir a la calle la gente le evitaba pues no querían involucrarse conmigo por haber estado detenido, le despidieron de la Escuela Normal y cuando encontraba un trabajo como profesor era despedido a petición de los apoderados por sus antecedentes.

Explica que terminó un Magíster en Filosofía en la Universidad Austral, pero el rector recibió instrucciones de no otorgar el Título, añadiendo que su esposa tuvo un embarazo gemelar que por la situación se vio interrumpido a los 6 meses, lo que trajo como consecuencia que uno de ellos quedara ciego e inválido, todo esto sumado a problemas económicos e inseguridad.



Expresa que constantemente fuera de su casa había un vehículo policial, el cual interrogaba a las personas que los visitaban, y tenían la correspondencia intervenida, concluyendo así el relato del actor.

Aduce que los hechos señalados anteriormente son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, perpetrados en perjuicio de la demandante, por lo que en virtud de principios del derecho internacional, es deber del Estado reparar a las víctimas de estas violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos.

Indica que el Estado de Chile, ha suscrito y reconocido declaraciones y convenciones a nivel internacional, y adherido a múltiples resoluciones emitidas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, además ha otorgado vigencia a determinadas normas que se fundan en la costumbre internacional y los Principios Generales del Derecho, es por esto, que ha ido adquiriendo una serie de obligaciones internacionales, que tienen como marco la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre”.

Sostiene que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, tratándose de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.

Expone que la responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

En base a la normativa interna, expresa que la responsabilidad del Estado se encuentra consagrada en normas del Derecho Público



chileno, en específico de la Constitución Política de la República de 1980, citando jurisprudencia de la Corte Suprema.

Asevera que la naturaleza de la responsabilidad extracontractual del Estado está contenida en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas ellas, normas propias del Derecho Público, excluyendo la aplicación de normas civiles, según lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia.

Cita el Capítulo I de nuestra Carta Fundamental de 1980, específicamente el artículo 1°, inciso 4°, relacionada con el artículo 5, inciso 2°, del mismo cuerpo legal, que en conjunto con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República de 1980, plasman los principios de la Primacía Constitucional y la Juridicidad, conforman el denominado “Estatuto de Responsabilidad Extracontractual del Estado”.

Manifiesta que la correcta resolución del caso *sub lite* requiere la aplicación armónica de la Constitución Política de la República de 1980, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado, siendo improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil.

En este sentido, reproduce el razonamiento de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes se han pronunciado de forma directa sobre lo inadecuado que resulta extender por la vía de la analogía ciertos conceptos propios del Derecho Civil, para resolver conflictos que versen sobre violaciones a los derechos fundamentales del ser humano, en conjunto con jurisprudencia de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En cuanto a las razones de texto que llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana, refiere las siguientes: que en este caso no se



trata de la búsqueda de una reparación para un delito común; el contexto en que fueron dictadas las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello; y la imprescriptibilidad de la acción civil que emana de un crimen de lesa humanidad.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción destinada a obtener indemnización de perjuicios derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad, sostiene que al igual que la acción penal, se puede aplicar normativa internacional y jurisprudencia relativa a la imprescriptibilidad de la acción penal y civil, citando jurisprudencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago y la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Refiere que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional suscrito y ratificado por Chile, actualmente vigente en su territorio, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana, que se encuentren reconocidos y garantizados por dicha Convención, siendo imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano, al interior del Sistema Interamericano de Protección de Derechos trae aparejada la obligación de reparar el mal o daño que ha causado tal violación.

Afirma que en Chile la lógica que debiera operar en casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos de alguna persona, tendría que ser de reparar íntegramente el mal causado, mencionando diversos instrumentos internacionales que refieren sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad.

Concluye que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble, constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación



de reparar adecuadamente y de manera justa a las víctimas, siendo esta última la que debe ser tratada como un deber imprescriptible.

Resume que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, se rige por normas y principios del Derecho Público y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, logrando sujetar un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente, desde los primeros acuerdos interestatales.

Reseña que así lo han entendido los tribunales superiores nacionales, y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad, y de los crímenes de derecho internacional en general, citando jurisprudencia reciente de nuestra Judicatura y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alega que dicha Corte hizo dos pronunciamientos fundamentales en esta materia: en primer lugar, señaló que si los hechos que daban origen al reclamo indemnizatorio habían sido calificados como delitos de lesa humanidad tales acciones civiles no deberían ser objeto de prescripción; y en segundo lugar, reiteró la doctrina fijada, en orden a que los programas administrativos de reparación no podían obstaculizar el acceso a la reparación judicialmente establecida.

Explica que ambos tipos de indemnizaciones podían legítimamente considerarse como diferentes o complementarias, o sea, “podría tomarse en cuenta, en una vía lo otorgado en la otra”, pero no podría significar el cierre de la vía judicial. Esto, para permitir la determinación individual de daños o para cuestionar la suficiencia de la reparación administrativa.

Menciona numerosos fallos en que nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia ha declarado la imprescriptibilidad de la acción



civil, cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional.

Alega que existe un daño de carácter moral que se expresa en el dolor, el sufrimiento, la angustia, la rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima cometida en contra de la demandante, como detenida y torturada, le ha tocado soportar.

Agrega que entenderemos por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Hace una revisión de la doctrinal nacional, en relación a la definición del daño moral, y jurisprudencia relacionada

Aduce que el daño moral se hace patente por sí mismo, en atención a los hechos, las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud para determinar el monto de la reparación pecuniaria, por lo que demanda el pago de \$200.000.000 por concepto del daño moral sufrido, producto del accionar ilícito de agentes estatales en su contra, con reajustes de acuerdo con el IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda, hasta su completo pago, más las costas del juicio, o, lo que el tribunal estime prudencialmente en justicia.

Por lo que previa cita de disposiciones legales, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, e legalmente por el Señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, pidiendo el pago de \$200.000.000 para Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, por el daño causado por agentes del estado; o la



suma que US. determine prudencialmente y en Justicia, con reajustes de acuerdo con el IPC, más intereses legales, ambos desde la fecha de notificación de la demanda o desde cuando estime; acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado a pagar a la persona demandante civil la suma señalada, o la que S.S. prudencialmente determine, más las costas del juicio.

Al folio 7, consta que con fecha 2 de agosto de 2022, se notificó la demanda de forma personal subsidiaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de representante del demandado Fisco de Chile.

Al folio 8, compareció doña Ruth Israel López, por el Fisco de Chile, contestando la demanda de autos, oponiendo excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante e identifica las prestaciones en dinero y otros medios de compensación dirigidos a la reparación integral de las víctimas; además agrega las reparaciones que, conforme a las leyes nacionales de reparación del Estado de Chile, ha obtenido el demandante, incluyendo beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la entrega de una cantidad de dinero, así como también transferencias directas en dinero.

Hace presente la complejidad reparatoria, expresando que en lo que respecta a justicia transicional habrían sido tres los objetivos a que se abocó el entonces Presidente Patricio Aylwin: (a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse.

Añade que orientada al segundo objetivo, la Comisión Verdad y Reconciliación, en su informe final propuso una serie de “propuestas de reparación”, entre ellas una pensión única de reparación para los



familiares directos de las víctimas y algunas prestaciones de salud, informe que sirvió de causa y justificación al proyecto que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Observa que durante el proceso de formación de esta ley se tuvo presente en todo momento que su objetivo era reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas, haciendo referencia a diversas expresiones en tal sentido, promoviéndose, según indica la demandada, la reparación del daño moral de las víctimas.

En este punto, identifica tres tipos de compensaciones: (a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; (b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre las prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas.

En cuanto al primer tipo de compensación, desglosa que en términos de costos generales para el Estado, a diciembre de 2019, el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Establece que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual, que no obsta de valorizarla para poder conocer cuál es su impacto compensatorio, pudiendo calcularse su valor indemnizatorio sumando las cantidades pagadas a la fecha y las que quedan por pagar.

Hace presente que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, indicando los montos en que se fijaron las pensiones anuales reajustables y consignando que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Indica una serie de reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, que incluye, entre



otros, derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura, beneficios educacionales y beneficios en vivienda.

Entrega un listado de actos de reparación simbólica, que habrían tratado de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Concluye señalando que existiría identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, pues tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenderían compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, por lo que los ya referidos mecanismos de reparación habrían compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente, citando jurisprudencia al efecto.

Opone, en subsidio, excepción de prescripción extintiva, conforme a las reglas del artículo 2332 del Código Civil en relación a lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo, ya que conforme al relato del actor, la detención ilegal y golpiza que sufrió, ocurrió desde el 19 de septiembre del año 1973 hasta el 13 de junio del año 1975 fecha en la que recuperó su libertad, y ante el entendido que estas acciones no pudieron ser ejercidas, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de esta demanda, esto es, el día 02 de agosto de 2022, habrían transcurrido en exceso el plazo de 4 años establecido en el artículo 2332 ya referido, debiendo acogerse la excepción de prescripción y rechazarse la acción indemnizatoria deducida.

En subsidio, alega la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, en relación a lo dispuesto por los artículos 2515 y 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil



que contesto, habría transcurrido con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Expone que la imprescriptibilidad sería excepcional, y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existiría, indicando que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público en base a lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, explicando que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Señala además que el fundamento mismo de la prescripción es una institución universal y de orden público, de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente, y que tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Refiere que la prescripción sigue un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, citando, al efecto, jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que establece que el principio general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad de la acción civil, que los tratados internacionales relacionados con la materia no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil.

Añade que la imprescriptibilidad que alguno de los tratados internacionales invocados establecen, se refiere sólo a la responsabilidad penal, y no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, indicando que del mismo fallo citado se desprende que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común.

Aduce que de la lectura de dicha sentencia, el plazo debe contarse, no desde la desaparición o detención del demandante, sino



desde que el titular de la acción indemnizatoria tuvo conocimiento y contó con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Concluye que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil.

Enumera normas contenidas en el Derecho Internacional, afirmando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia; por lo que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, por lo que deben aplicarse las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En cuanto a la fijación de la indemnización por daño moral, sostiene que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una ayuda que le permita atenuar el daño, alegando que las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En subsidio, de las excepciones precedentes de prescripción y reparación integral del daño, alega que la regulación del daño moral debe considerar todos los pagos ya recibidos por el actor del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, conforme a las leyes de reparación y que seguirá percibiendo a título



de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales, indicando que acoger la demanda implicaría que un daño sea indemnizado dos veces y que debe establecerse como parámetro válido las sentencias de tribunales en la materia.

Finalmente, sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada, considerando que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia acoja la demanda y establezca dicha obligación y además, sólo una vez, que aquella se encuentre firme y ejecutoriada.

Respecto de los intereses, explica que de conformidad al artículo 1551 del Código Civil, se establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Concluye que en el caso de que se acogiera la demanda de autos, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado incurra en mora.

En consideración a lo expuesto solicita tener por contestada demanda civil y en definitiva, conforme a sus excepciones, defensas y alegaciones, solicita se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto pretendido.

Al folio 12, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, los que da por reproducidos y agrega ciertas consideraciones.

Respecto a la “excepción de pago”, alegada por la demandada, en consideración a que la demandante ya ha sido indemnizada en virtud de la ley 19.123, y fundamentalmente por los beneficios pecuniarios percibidos al amparo de las leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones posteriores, señala que resulta absolutamente errado.



Indica que los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990, y en ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado por la demandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Alega que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible, por lo que no cabe acoger la excepción alegada.

Reseña que el Fisco reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima directa, y los pagos que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega.

Expone que el Fisco de Chile hace referencia a que las diferentes leyes de reparación han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, por lo que en términos de la Ley N° 19.123 la palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de la demandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy, por las brutales torturas proferidas por agentes del Estado.

Alega que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto.

Explica que al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible deviene la excepción de reparación integral invocada por el Fisco de



Chile, por lo que cita jurisprudencia de los tribunales superiores de Justicia.

Refiere que el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la Ley N° 19.123, y muy especialmente en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría abocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional, por lo que el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable.

Respecto a la excepción de prescripción extintiva, considera insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil, por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional

Hace presente que de acuerdo a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes, citando jurisprudencia al respecto.

Sostiene que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento, lo que impide que ésta sea aplicada por analogía, por lo que pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado.

Concluye que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de



los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos del Código Civil.

Indica que existe un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable, asegurando que cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del estado, por hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños.

Respecto de la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, aduce que la más reciente jurisprudencia de la Excm. Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

En relación al monto de lo demandado, reseña que una demanda indemnizatoria exige pretensiones concretas, si bien no hay dinero que supla el dolor experimentado por la demandante.

Por lo que previa cita de disposiciones legales, solicita tener por evacuado el trámite de réplica, y de traslado al de dúplica.

Al folio 16, el demandado evacuó el trámite de dúplica, ratificando y reiterando las argumentaciones y defensas expresadas en la contestación de la demanda, que tiene por expresamente reproducidas.

En cuanto a la excepción de reparación integral, reitera lo expuesto en la contestación, indicando que las prestaciones fueron claramente indemnizatorias del daño moral y constituyó un esfuerzo del Estado para dar solución y reparar el perjuicio ya que la ley 19.992 tuvo un fin reparatorio, por lo que es excluyente de otras



indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la ley sólo la hace compatible con otras pensiones.

Afirma que por ello la indemnización demandada es improcedente, por ser incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado todo lo cual constituye una excepción de pago, y no solo una incompatibilidad, agregando que cada persona tiene derecho a estimar que no ha sido suficientemente resarcida por el beneficio que la ley otorga, pero debe tenerse en consideración que el Estado hace un esfuerzo para otorgar no sólo una pensión, sino que además consagra otros beneficios sociales de salud y de apoyos técnicos y de rehabilitación para la superación de lesiones surgidas a consecuencia de la prisión política o la tortura, así como otros beneficios.

En relación a la prescripción de las acciones deducidas en este juicio, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013, que concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos.

Agrega que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil, citando jurisprudencia relacionada.

En cuanto a las restantes alegaciones sostenidas en la réplica, como el daño moral, se remite a todo lo expresado en el escrito de contestación a la demanda, las cuales se dan por reproducidas en mérito del principio de economía procesal; agregando que no existen los daños morales evidentes aun tratándose de víctimas por repercusión, por lo que el daño moral debe probarse tanto en su existencia como en su extensión.

Por lo que solicita tener por evacuado el trámite de la dúplica y rechazar la demanda en todas sus partes.



Al folio 19, modificado al folio 27, se recibió la causa a prueba en autos, rindiéndose la que consta en autos.

Al folio 75, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación convencional de don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, ha interpuesto en esta sede civil demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, representado legalmente en esta jurisdicción por don Juan Antonio Peribonio Poduje, solicitando se acoja y se condene al demandado al pago de \$200.000.000 para Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, por el daño causado por agentes del estado; o la suma que el tribunal determine prudencialmente y en Justicia, con reajustes de acuerdo con el IPC, más intereses legales, ambos desde la fecha de notificación de la demanda o desde cuando el tribunal estime, más las costas del juicio.

Basó su demanda en los hechos ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, que se tienen por expresamente reproducidos.

SEGUNDO: Que doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contestó demanda, solicitando su total rechazo, alegando la excepción de reparación integral del daño fundado en que el demandante ha sido indemnizado, recibiendo una pensión anual, así como gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y beneficios educacionales y de vivienda; y también reparaciones simbólicas.

Asimismo opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles, todo ello de acuerdo a las normas y jurisprudencia que cita y que ya fueron señaladas en la parte expositiva de este fallo.

En subsidio de lo expuesto, sostiene que la cifra reclamada, como daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las



acciones y medidas adoptadas por el Estado de Chile y los montos otorgados por los Tribunales de justicia por este concepto; agregando que resulta improcedente el pago de intereses y reajustes, los que sólo procederían en el caso que la sentencia acoja la demanda y establezca dicha obligación y además, sólo una vez, que aquella se encuentre firme y ejecutoriada y el demandado incurra en mora.

TERCERO: Que en sus escritos de réplica y dúplica, las partes reiteraron las alegaciones, excepciones y defensas de la demanda y contestación, respectivamente.

CUARTO: Que, del tenor de los escritos que componen la etapa de discusión, se advierte que es un hecho no controvertido entre las partes, que el demandante tiene la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990.

QUINTO: Que, del examen del proceso, se advierte que la controversia de hecho ventilada, radica en dirimir sobre la existencia de los daños y perjuicios demandados; en la afirmativa, origen, naturaleza y monto de los mismos, la existencia de actos reparatorios o indemnizatorios ya otorgados al demandante, con ocasión de los daños y perjuicios alegados por éste; en su caso, naturaleza, detalle, fecha de otorgamiento y monto de aquéllos; los hechos o circunstancias que configurarían una interrupción natural o civil a la prescripción alegada por el demandado; la existencia de los perjuicios alegados por el actor; en la afirmativa, naturaleza, entidad, monto y existencia de actos de mitigación de los mismos; y, finalmente, la existencia de una relación causal entre la actividad desplegada por el Estado de Chile, a través de sus agentes, en contra del demandante, y los daños alegados por este último.

SEXTO: Que para acreditar sus afirmaciones, el demandante allegó a este tribunal prueba documental, no objetada de contrario, y prueba testimonial:

PRUEBA DOCUMENTAL:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CSYFXMEZGSB

a. Al anexo de folio 1:

1. Certificado de nacimiento de Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco.

2. Copia de documento denominado “Certificado” emitido por el Instituto de Derechos Humanos, de fecha 13 de diciembre de 2021, en que consta que don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech I, adjuntando nómina donde aparece con el número 21.815.

3. Copia de expediente con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, relativo a don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, nacido el 02 de noviembre de 1940, en que consta que fue detenido por primera vez el día 19 de septiembre de 1973, en su domicilio, siendo liberado el día 04 de noviembre de 1973, permaneciendo privado de libertad por 2 meses y 6 días, indicándose los recintos en que estuvo recluido y que le preguntaban por las armas del MAPU en Valdivia, que le aplicaron golpes de pie y puño así como simulacro de fusilamiento; consta que fue detenido por segunda vez el día 06 de diciembre de 1973, siendo liberado el día 13 de junio de 1975, permaneciendo privado de libertad por 1 año 6 meses y 7 días, indicándose los recintos en que estuvo recluido y que fue golpeado, le aplicaron corriente en la cabeza y en los genitales, lo que siguieron haciendo cada vez que no conseguían respuestas, para luego arrastrarlo hasta su celda, donde le dejaron vendado y amordazado, sin permitirle al obispo visitarle por haber sido torturado; insertándose también un relato en primera persona de los hechos vivenciados.

4. Documento denominado “Informe psicológico”, emitido por PRAIS, respecto de Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, suscrito por la psicóloga Ximena Paz Herrera García, en que se señala que el motivo de la evaluación es pesquisar posible daño psicológico asociado a prisión y tortura vividas durante el periodo de dictadura militar en Chile, explicando la contextualización histórica y las técnicas aplicadas para elaborar el informe. Indica que el evaluado se conecta



por videollamada por contexto de pandemia, se mantiene colaborador durante el proceso y se evidencia la resiliencia presente, quien le explica que en 1973 él era líder del MAPU y lideraba la UP en Valdivia, y que lo mantuvieron más de tres meses incomunicado en una celda, ubicada a unos metros de donde se torturaba, donde lo interrogaban mediante corriente eléctrica en frente y genitales. Explica que mientras pasaba esto, su esposa tenía que tratar de mantener su trabajo y viajar a verlo, muchas veces con sus hijos, sufriendo acoso laboral e inseguridad permanente. Relata que cuando el evaluado salió de la cárcel debió seguir firmando mensualmente, las personas conocidas lo evitaban en la calle, si conseguía trabajo al poco tiempo lo despedían por presión de los apoderados y que si bien completó sus estudios universitarios, el rector recibió instrucciones de no otorgarle el título. Agrega que la esposa del evaluado tuvo embarazo gemelar, el que por esta situación se vio interrumpido a los 6 meses, por lo que uno de ellos quedó ciego e inválido, todo esto sumado a problemas económicos e inseguridad, le hacían interrogatorios a las personas que visitaban su casa, correspondencia intervenida, entre otros, por lo que sus hijos padecieron este ambiente de temor e inseguridad. La psicóloga concluye la existencia de indicadores de daño en el evaluado, asociados principalmente al denominado Proyecto de vida, siendo evidente el quiebre en lo familiar, psicológico y económico, pues el aspecto monetario se vio fuertemente mermado, explicando que el evaluado le dio un sentido mayor a lo acontecido mediante el apoyar a otros, y que la tortura física y psicológica sufrida repercutía en la estabilidad emocional del núcleo familiar y en la esfera individual, sumado a que se le imposibilitó acceder a trabajos por su vivencia asociado a lo político y que no se le otorgó su título de estudios.

b. Al anexo del folio 31:

5. Fallo dictado por la Corte Suprema, de fecha 14 de septiembre de 2015, en causa rol 1092-2015.



6. Fallo dictado por la Corte Suprema, de fecha 13 de junio de 2018, en causa rol 8105-2018.

7. Fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso Órdenes Guerra y otros vs Chile”.

8. Copia de documento suscrito por Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco otorgado ante la 2° Notaría de Valdivia, con relato de los hechos que padeció a partir del golpe de Estado de 1973.

PRUEBA TESTIMONIAL:

Al folio 49, rola la declaración testimonial de **Patricio Renato Carrillo López**, quien legalmente juramentado y sin tacha, expone lo siguiente al tenor de la interlocutoria de prueba del folio 19, rectificadas al folio 27:

Al punto 3 de la resolución que recibió la causa a prueba, acerca de la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que se demandan y, en su caso, relación de causalidad entre el daño que reclama el demandante como objeto de indemnización y los hechos atribuidos a agentes del demandado como generadores de aquél, declara que estuvo detenido con el demandante desde fines de diciembre de 1973 a junio de 1975, ya que pertenecían al mismo grupo político, explicando que el actor estuvo detenido un año y medio, con tres meses en celda solitaria, siendo torturado, con aplicación de golpes, patadas y aplicación de electricidad en los genitales.

Relata que en marzo de 1974 estuvieron hacinadas cinco personas en una celda, con constantes allanamientos y les destruían la comida y las cosas que tenían, agregando que cuando fueron liberados, el demandante tuvo un período de cesantía, luego tuvo dos hijos y uno nació con problemas, que obviamente fue producto de las torturas sufridas por el actor en prisión; expresando que todo ese período sin trabajo a cargo de una familia fue una situación difícil por lo que es justo una reparación hacia él.

Al ser repreguntado acerca si sabe de qué manera se ha manifestado el daño en la vida del demandante, indica que durante el



período militar el actor estuvo cesante y trabajaba sólo su señora, teniendo cinco hijos y uno de ellos con problemas por lo que necesitaba cuidados especiales, lo que provocó un daño psicológico muy grave en el demandante, agregando que además le negaron recibir su título de la Universidad por requerimiento de los militares, pero que el demandante ha sido siempre una persona muy austera y amable.

Al ser repreguntado acerca de qué manera se ha manifestado el daño en la vida del actor, a nivel físico, contesta que por la tortura quedó con daños físicos permanentes, como dificultad para caminar, depresión, tendencia a aislarse, dificultad para reinserirse, luego de ser juzgado por las acusaciones en su contra y ser declarado como inocente, por lo que se le debe dar una justa compensación.

Al ser repreguntado acerca de si sabe si el demandante ha recibido tratamiento posterior a su liberación, responde que no, hasta donde él sabe.

Al folio 49, rola la declaración testimonial de **David Alberto San Martín Álvarez**, quien legalmente juramentado y sin tacha, expone lo siguiente al tenor de la interlocutoria de prueba del folio 19, rectificadas al folio 27:

Al punto 3 de la resolución que recibió la causa a prueba, acerca de la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que se demandan y, en su caso, relación de causalidad entre el daño que reclama el demandante como objeto de indemnización y los hechos atribuidos a agentes del demandado como generadores de aquél, declara que conoció al demandante en el MAPU en el año 1970 y posterior al golpe militar fue informado que el actor había sido detenido por un año y medio para después ser sobreseído.

Indica que la esposa del demandante le contó que había sido torturado y le dejaron muchas secuelas psicológicas, y que una vez liberado no encontró trabajo y tenían que vivir con el sueldo de la esposa, lo que fue traumatizante para él ya que no podía aportar a su



hogar, agregando el testigo que lo que vivió el actor no tiene cuantía respecto al daño causado.

Al ser repreguntado acerca de si sabe de las torturas padecidas por el demandante, responde que sabe que fue torturado con corriente eléctrica en los genitales, que estaba aislado y que no se le daba comida a veces, y a la repregunta de si sabe de qué manera afectó en su familia el que no consiguiera trabajo, declara que un día el demandante le comentó que no tenía trabajo y que estaba como pre diabético, pero que el actor le explicó que era por un problema psicológico que impedía que su cuerpo respondiera como corresponde.

Al folio 49, rola la declaración testimonial de **Rodrigo Alejandro Vargas Soto**, quien legalmente juramentado y sin tacha, expone lo siguiente al tenor de la interlocutoria de prueba del folio 19, rectificada al folio 27:

Al punto 3 de la resolución que recibió la causa a prueba, acerca de la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que se demandan y, en su caso, relación de causalidad entre el daño que reclama el demandante como objeto de indemnización y los hechos atribuidos a agentes del demandado como generadores de aquél, declara que la demanda del actor se ajusta por derivar de daños psicológicos y físicos a consecuencia de la acción de agentes del Estado después del golpe militar.

Al ser repreguntado acerca de qué manera se ha manifestado el daño psicológico en la vida del actor, contesta que en serias limitaciones anímicas para retomar una vida normal, y en lo físico, ha visto una aceleración en su deterioro en cuanto a movilidad, atención e interés para la edad que tiene, provocado por el estrés vivido a causa de los apremios sufridos.

Al ser repreguntado acerca de qué manera se vio afectada la familia del actor por las secuelas descritas, responde que el demandante tuvo serios problemas para sacar a su familia adelante y que sin el apoyo de su esposa habría sido imposible.



Al ser repreguntado hace cuánto tiempo y en qué circunstancias conoce al actor, declara que del año 70, por pertenecer a la misma asociación política, por lo que se forjó entre ellos una relación política a través de los años.

Al folio 73, rola la declaración testimonial de **Raúl Olivares Thiers**, quien legalmente juramentado y sin tacha, expone lo siguiente al tenor de la interlocutoria de prueba del folio 19, rectificada al folio 27:

Al punto 3 de la resolución que recibió la causa a prueba, acerca de la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios que se demandan y, en su caso, relación de causalidad entre el daño que reclama el demandante como objeto de indemnización y los hechos atribuidos a agentes del demandado como generadores de aquél, declara que conoce al demandante de 1969 a través del MAPU, explicando que después perdió el contacto y se enteró posteriormente que había sido detenido, sin mayores detalles, de los que se enteró después, acerca de lo que vivió y padeció, los meses aislado, las torturas, y que lo dejaron libre en el año 75.

Menciona que recuerda haber oído que el demandante después de que salió era otro, no tenía la misma alegría, tenía temores y dificultad para relacionarse, retraído, trastorno severo del sueño, y el testigo cree desde su mirada como médico psiquiatra que tendría trastorno de estrés postraumático y que hay señales de que el actor está con un alcoholismo inveterado y dermatitis atópica hace años, lo que se puede correlacionar con situación de estrés, además de otros factores como los problemas para encontrar trabajo y sumado a que sus mellizos nacieron prematuros en el año 76, y uno de ellos quedó con daño ocular y parálisis cerebral, por lo que el testigo considera que hay suficiente evidencia de los daños.

Al ser repreguntado acerca de cómo le consta lo declarado, refiere que ha tenido la oportunidad de conversar con el demandante y su familia y así saber más; y al ser repreguntado acerca de los apremios económicos sufridos, responde que sabe que fue despedido



de trabajos porque los apoderados objetaban su presencia, por lo que no pudo tener estabilidad laboral, al igual que su señora, por lo que la familia durante dictadura vivió de manera inestable y con la necesidad de ayudar a su hijo.

Al ser repreguntado acerca de si el demandante se ha tratado el trastorno, contesta que no se ha sometido a ningún tratamiento y acerca de si los daños persisten hasta hoy, responde categóricamente que sí, hay secuelas del trastorno y que para el testigo es evidente un alcoholismo en que no puede estar un día sin alcohol porque le viene el síntoma de privación.

SÉPTIMO: Que por otra parte, consta de oficio solicitado por la defensa fiscal, incorporado al folio 14, ORD. DSGT N° 4792/8950, del Instituto de Previsión Social, de fecha 08 de septiembre de 2022, que informa beneficios de reparación recibidos por don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (conocida como “Ley Valech”), por la suma total a la fecha de \$37.622.876 y una pensión actual de \$237.798.

OCTAVO: Que, del análisis del contenido de los medios de prueba legales incorporados al pleito, consistentes en instrumental legalmente aportada, no objetada por la contraria y valorada en forma legal, conforme a la naturaleza de cada instrumento agregado, de la prueba testimonial, y de las declaraciones de las partes se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1. Que el demandante, don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, se encuentra reconocido bajo el número 21.815, en el documento público denominado “Nómina de personas reconocidas como víctima”, en el listado de Prisioneros Políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech I.

2. Que el actor fue detenido en dos ocasiones: desde el día 19 de septiembre de 1973 hasta el 4 de noviembre de 1973, permaneciendo privado de libertad por 2 meses y 6 días; y desde el 6 de diciembre de 1973 hasta el día 13 de junio de 1975,



permaneciendo privado de libertad por 1 año 6 meses y 7 días, sufriendo agresiones y torturas en dichos períodos.

3. Que don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, en su calidad de víctima de prisión política y tortura, ha recibido hasta el 28 de marzo de 2023, la suma total de \$36.060.223 por concepto de pensión de la Ley N°19.992, Aporte único ley N°20.874 por la suma de \$1.000.000, y aguinaldos legales, recibiendo una pensión actual Valech, ascendente a \$237.798.

NOVENO: Que, previo a abordar el estudio del fondo de la controversia, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de reparación integral, y la excepción de prescripción extintiva, opuestas por el demandado en la contestación, toda vez que su decisión incide en el fondo de la pretensión indemnizatoria del actor.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la excepción de reparación integral del daño, opuesta por el demandado, éste alegó que la pretensión indemnizatoria de la parte demandante se encuentra previamente satisfecha por haber sido indemnizada, en su concepto, conforme a las leyes que indica, de acuerdo a los fundamentos reseñados en la parte expositiva, a la cual el tribunal se remite por economía procesal.

Sobre el particular, conforme a lo indicado –como se dijo-, es un hecho no controvertido que el demandante tiene la calidad de víctima de derechos humanos cometidas por agentes del Estado de Chile durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, y, además, que se encuentra calificada como víctima, en el Informe y Nómina del listado de Prisioneros Políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech I, bajo el número 21.815.

Al respecto, las víctimas de dichos atentados son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación, establecidos en la Ley N° 19.123, ampliada posteriormente por la Ley N° 19.980, de lo que se colige que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, el daño causado por el Estado a las víctimas de la dictadura y a sus familiares expresados en tales leyes, como asimismo su



obligación de reparar ese daño, encontrándose éste, por ende, en la necesidad de acreditar la extinción de la obligación de reparar, alegada por el actor y reconocida por el Fisco.

Por otro lado, la mentada Ley N° 19.123, conforme a su artículo 1°, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, cuyo objeto es la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En este sentido, el artículo 2 de la mencionada Ley consagra que le corresponderá especialmente a la Corporación, entre otras funciones, *“Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”, razón por la cual su artículo 17 estableció “una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, que se individualizan en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”,* y, a su turno, el artículo 18 del cuerpo legal en mención dispone que *“Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior”.*

Debe considerarse entonces que las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, teniendo presente que la Ley 19.123 no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, preceptuando en su artículo 24: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”.*



En consecuencia, el objeto de la ley en comento es “promover” la reparación del daño moral a las víctimas a quienes se refiere, y no repararlo derechamente, cual es la finalidad general de una indemnización de perjuicios, y por esa razón reconoce expresamente que la pensión de reparación que ella crea, es perfectamente compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce actualmente o en el futuro el respectivo beneficiario; por cuanto no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistrado- con una reparación meramente simbólica.

Por su parte, en relación con los argumentos de la demandada, resulta efectivo que el Estado chileno ha efectuado variados esfuerzos de resarcimiento de perjuicios una vez concluida la dictadura, a pesar de lo cual, tales reparaciones han tenido un carácter general, siendo destinadas a una solución reparatoria abstracta y uniforme para abarcar a todos los afectados de dicha situación, pero por conceptos distintos al daño moral que específicamente se demanda en estos autos, por lo que, en virtud de su carácter general, no han considerado la situación particular y personal de cada una de las personas víctimas de apremios ilegítimos ocurridos durante el período invocado en la demanda, y por ende, tampoco han considerado la situación particular e individual del demandante en este juicio.

UNDÉCIMO: Que en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago, como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial, y, en comparación, los mecanismos de reparación invocados por la demandada no se ajustan a la norma internacional referida, la que, de acuerdo a lo establecido en el inciso



2º del artículo 5 de la Constitución Política de la República, debe ser cumplida por el Estado de Chile.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un caso análogo, que *“la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley”* (Considerando 13º de la sentencia dictada por el máximo tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).

En virtud de lo aquí razonado, el tribunal estima que los pagos alegados por el demandado, no constituyen propiamente una reparación “integral” del daño moral sub lite, y, en consecuencia, no constituyen una indemnización de perjuicios, por lo que corresponderá desestimar la excepción de reparación integral del daño, sin perjuicio de lo que se indicará más adelante, en cuanto a la evaluación de los perjuicios demandados.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado en su escrito de contestación, dicha parte sostuvo que en el caso *sub lite* son aplicables las reglas generales de la prescripción contenidas en el Código Civil, y que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la del cobro que se realiza en estos autos, ha transcurrido con creces el plazo establecido en el artículo 2332 del mencionado cuerpo legal, y en subsidio, para el caso que se estime que la norma anterior no es aplicable en la especie, afirmó que, en la misma hipótesis ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años contemplado en el artículo 2515 del mismo instrumento, todo ello en virtud de los



fundamentos ya referidos en la parte expositiva, a la cual el tribunal se remite por economía procesal.

Al respecto, y sin perjuicio que las normas relativas a la prescripción contenidas en el Código Civil son de aplicación general, a juicio de esta sentenciadora, resulta aplicable en la materias *sub lite* el mandato contenido en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, que establece como limitación a la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, con relación a lo presupuestado en el artículo 2° del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por el Estado chileno, instrumento internacional que obliga a los estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

En tales condiciones, resulta aplicable y vinculante el inciso segundo del artículo 38 de nuestra Carta Fundamental, que consagra el principio de responsabilidad del Estado por los actos de la administración del mismo, principio que se encuentra reconocido en diversos textos de índole internacional, que consagran como principio universal el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, y estatuyen que ninguna, persona puede ser lesionada en éstos, e impiden a los Estados aplicar el derecho interno con el fin de eludir responsabilidad de índole internacional, como ocurre en el caso de los derechos humanos, por lo que estas normas deben interpretarse en el sentido amplio, lo que conduce a concluir que es deber del Estado reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental, el que por su propia naturaleza es imprescriptible.

A mayor abundamiento, el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que nadie debe ser



sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, y, si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece al espíritu humanitario de la protección a los derechos humanos, cuya aplicación, en definitiva, prima sobre las normas internas de derecho privado.

DECIMOTERCERO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el motivo anterior, se establece que las acciones emanadas de hechos públicos y notorios constituidos por las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en nuestro país durante la época de la dictadura militar, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, tienen el carácter de imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad, al atentar contra derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, por lo que un acto ilícito de esa naturaleza, genera tres obligaciones imprescriptibles para el Estado, las que se refieren a investigar las violaciones denunciadas, sancionar a los responsables y reparar íntegramente a las víctimas.

Por otro lado, cabe señalar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad dispone en su artículo 4 la imprescriptibilidad de la acción penal emanada de los crímenes de lesa humanidad, situación que no exige necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, por lo que cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir las acciones y otorgarles un tratamiento desigual, no permitiría mantener la coherencia y unidad jurídica, respecto de lo cual nuestro máximo tribunal ha fallado: “Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.”(Considerando 7° de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el 29 de marzo de 2016, en el Rol N° 2289-2015).

DECIMOCUARTO: Que, en virtud de lo expuesto y razonado en los considerandos precedentes, este tribunal considera que en el caso



de autos, no resultan atingentes las normas legales internas que regulan la prescripción civil de la responsabilidad extracontractual del Estado, por encontrarse dichas disposiciones en contradicción con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que amparan el derecho preferente de las víctimas de recibir una reparación integral, motivo por el cual se desestimaré la excepción de prescripción extintiva opuesta, fundada en el artículo 2332 del Código Civil, y en subsidio, aquella fundada en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal, resultando estéril cualquier análisis adicional.

DECIMOQUINTO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión del actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

DECIMOSEXTO: Que abordando el fondo de la acción indemnizatoria ejercida en autos, ésta encuentra su consagración positiva a partir de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, que prescribe el principio constitucional de responsabilidad del Estado por los actos de la Administración del mismo, recogido posteriormente en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, y el artículo 44 de la misma Ley, que delimita la acción anterior al disponer que *“Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”*.

De este modo, los elementos o requisitos de procedencia de la responsabilidad perseguida en autos, son: a) una acción u omisión de un órgano o agente estatal; b) que dicha acción u omisión tenga su origen en una falta de servicio; c) que dicha acción u omisión originada por falta de servicio, cause un daño o lesión en los derechos de un



particular administrado; d) que entre la acción u omisión y el daño exista una relación de causa y efecto, respectivamente; a lo que se puede añadir un quinto y último requisito, a saber, que el daño no se encuentre indemnizado, toda vez que la indemnización de perjuicios en nuestro ordenamiento jurídico no puede ser fuente de lucro ni configurar un enriquecimiento sin causa, debiendo cubrir la efectiva extensión del perjuicio que se trata de resarcir.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en cuanto a la concurrencia del primer requisito de procedencia señalado en el numeral anterior, esto es, una acción u omisión de un órgano o agente estatal, se tendrá por acreditada la existencia de una acción ejecutada por agentes del Estado de Chile en contra del demandante, toda vez que es un hecho pacífico entre las partes, que el actor tiene la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, y adicionalmente, está asentado en el fundamento octavo, que el demandante, don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, se encuentra reconocido bajo el número 21.815, en el documento público Listado de Prisioneros Políticos y torturados, elaborado por la Comisión Valech I.

DECIMOCTAVO: Que, en cuanto a la concurrencia del segundo de los requisitos de procedencia indicados en el apartado decimoquinto, esto es, que la acción de agentes del Estado descrita en el considerando anterior, haya tenido su origen en una falta de servicio, se debe tener presente que la jurisprudencia ha concebido la falta de servicio como la infracción a un deber objetivo de conducta, que es análogo al concepto civil de culpa, en que se efectúa la comparación entre la gestión efectiva del servicio y un estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública.

La falta de servicio denota el incumplimiento de un deber de servicio, incumplimiento que puede consistir en que no se preste un servicio que la Administración tenía el deber de prestar, que sea prestado tardíamente o que sea prestado en una forma defectuosa de



conformidad con el estándar de servicio que el público tiene derecho a esperar.

Así, en conformidad con lo estatuido en el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, es deber del Estado, entre otras cosas, “*dar protección a la población*” y “*asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional*”, y, a su vez, lo dispuesto en relación al respeto de los derechos esenciales consagrado en el inciso segundo del artículo 5° de dicho Código Político, siendo tales derechos, en lo pertinente para la resolución del caso *sub lite*, el derecho a la integridad física y psíquica, como también el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, inherentes a la condición de ser humano y que se vieron vulnerados en la persona del demandante, en virtud de lo establecido precedentemente.

En consecuencia, se tendrá por establecida la concurrencia del requisito en mención, esto es, la falta de servicio cometida por el Estado de Chile en contra del demandante, constituida por la violación a los derechos esenciales de que es titular en razón de su condición de persona humana ya señalados con antelación, cometida por agentes del estado, precisamente la entidad encargada de velar por la protección de tales derechos y de la dignidad de sus habitantes, siendo su actuar una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales.

DECIMONOVENO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor, en virtud del tercer requisito de procedencia de la responsabilidad perseguida, señalado en el motivo decimosexto, esto es, que la acción ilícita del Estado cause un daño o lesión en los derechos de un administrado, a partir del tenor de la demanda, el perjuicio cobrado corresponde a un daño moral propio del demandante como víctima directa, provocado en virtud del hecho ilícito asentado conforme a los apartados precedentes.



Al respecto, cabe tener presente que se ha entendido que el daño moral es aquel que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona, noción que la mayoría de la doctrina reconoce como la forma de entender la indemnización del daño moral en Chile, como la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima.

La doctrina también lo ha entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

VIGÉSIMO: Que ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

En este sentido, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que debe ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico, teniendo su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, como se ha venido razonando, el demandante, don Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco, habría visto afectada su salud mental y psicológica por el accionar de agentes del Estado de Chile, presentando múltiples secuelas por motivo de ser víctima de la dictadura en el año 1973, además de las lesiones físicas sufridas con ocasión de los malos tratos.

Al efecto, en orden a acreditar su existencia y evaluación, el demandante rindió prueba documental y testimonial que da cuenta, de las secuelas psicológicas y físicas que presenta al día de hoy, pormenorizada en el considerando en este fallo, debiendo tenerse en consideración que fue detenido en dos ocasiones, sufriendo distintas



torturas como aislamiento, golpizas, aplicación de corriente eléctrica en cabeza y genitales, entre otros.

A lo anterior, cabe agregar, conforme a los dichos del actor y la prueba rendida, que se encuentra acreditado que éste mantiene secuelas psicológicas importantes, tales como la existencia de indicadores de daño asociados principalmente al denominado Proyecto de vida, así como un quiebre familiar, psicológico y económico.

En este contexto, y a partir de lo ya señalado, se ha acreditado con suficiencia el daño moral demandado, consistente en la afectación a la salud psíquica en la persona del actor, sin perjuicio del dolor físico producido por las torturas sufridas, con ocasión de sus dos detenciones, además de la pérdida ilegítima de la libertad ambulatoria, por lo cual se tendrá por acreditado el requisito en análisis.

Se tiene especialmente presente además, que aparece de la prueba documental y testimonial acompañada, así como las declaraciones de la parte que no fueron objetadas por la contraria, que el demandante a causa del permanente estrés sufrido padece compromiso auditivo, dificultad para caminar, depresión, tendencia a aislarse, dificultad para reinserirse.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la concurrencia en la especie del cuarto de los requisitos señalados, esto es, que entre la acción ilícita y el daño, exista una relación de causa y efecto, también se tendrá por cumplido, toda vez que, a partir de lo consignado en los fundamentos décimo séptimo al precedente, se colige que el perjuicio asentado en el motivo anterior, sufrido por el actor, fue directamente causado por la actividad desplegada por el Estado de Chile a través de sus agentes, en contra del demandante.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto al quinto y último de los requisitos indicados en el fundamento antes aludido, esto es, que el daño no se encuentre indemnizado, también se tendrá por cumplido, en atención a lo razonado en el basamento undécimo.



VIGÉSIMO CUARTO: Que, de conformidad con lo dispuesto en los motivos décimo cuarto al precedente, el tribunal estima que concurren en este caso los requisitos de procedencia de la indemnización por daño moral reclamada, por lo cual corresponde abordar la determinación del monto de la misma, la cual, según lo pedido en el libelo, asciende a la suma de \$200.000.000, o bien, el monto que el tribunal establezca.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en orden a determinar su valuación, se tendrá en cuenta las declaraciones del actor, la documental acompañada y la prueba testimonial rendida, que refiere a las afectaciones psicológicas y físicas sufridas por el demandante, producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado y que han permanecido en el tiempo.

Al respecto, se tiene presente que, además de las dificultades de prueba del daño moral, los tribunales se enfrentan a la dificultad de traducir lo que es un concepto intangible en una realidad monetaria (Hernán Corral Talciani, “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual”, Editorial Jurídica, año 2011, página 167).

En este sentido, y conforme al mérito de la prueba legalmente incorporada, se advierte que el actor fue gravemente privado de la posibilidad de tener un desarrollo vital en condiciones objetivamente normales, seguras y dignas, lo cual se manifiesta en el daño ya comprobados en estos autos.

Por otro lado, sin perjuicio de lo decidido en el fundamento undécimo, el tribunal estima que el Estado, ha concedido beneficios pecuniarios en favor del actor, que han implicado una mitigación del daño causado, que si bien no constituyen una indemnización integral del mismo, sí inciden en la valuación del resarcimiento solicitado en este juicio.

Por último, se tiene especialmente presente que se ha tenido por acreditado que el demandante mantiene secuelas psicológicas y físicas con ocasión de los hechos vivenciados, así como diversos



deterioros en su salud, lo que también será considerado al momento de regular el daño.

VIGÉSIMO SEXTO: Que si bien la privación de libertad y tortura en un contexto como el que ya se ha referido latamente, resulta complejo de cuantificar, este tribunal lo calculará teniendo especialmente presente lo referido en los motivos precedentes, con el fin de fijar el *quantum* indemnizatorio que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima, siendo necesario, con el objeto de analizar la severidad del sufrimiento padecido, tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo presente para ello las características del trato, tales como la duración de los padecimientos, los apremios físicos y mentales que éstos pueden causar, el tiempo transcurrido, así como las reparaciones materiales y morales proporcionadas por el Estado de Chile al demandante.

Atendido los hechos asentados, el tribunal tiene en especial consideración para la determinación de la indemnización, la gravedad de las violaciones a derechos humanos a que fuera sometido el demandante, que incluyó entre otras, apremios, aislamiento, golpes y graves torturas, manteniendo secuelas psicológicas y físicas importantes, por lo que se regula prudencialmente la indemnización solicitada, en la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para el demandante.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la solicitud de intereses, considerando que éstos constituyen una indemnización de perjuicios por la mora, se desestimaré esta petición en la forma pedida en la demanda, pues, en la especie, la mora sólo se produce a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada, por lo que así se ordenará, debiendo agregarse a la suma referida en el punto anterior, intereses corrientes, los cuales deberán calcularse desde que el demandado se encuentre constituido en mora, es decir, desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo, lo que tendrá que ser calculado por la Unidad de Liquidación, en la oportunidad procesal respectiva.



VIGÉSIMO OCTAVO: Que la suma ordenada pagar, se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor por el período que media entre que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en cuanto a las alegaciones y defensas subsidiarias de la demandada, referidas a la regulación de la indemnización por daño moral, corresponderá desestimarlas, en atención a lo dispuesto en los considerandos vigésimo cuarto y siguientes.

TRIGÉSIMO: Que, en cuanto a las defensas y alegaciones subsidiarias de la demandada sobre la improcedencia de reajustes e intereses en la forma que indica, corresponderá acogerlas parcialmente, en razón de lo razonado en los motivos vigésimo séptimo y vigésimo octavo.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que las demás probanzas rendidas en autos, no analizadas pormenorizadamente, en nada alteran lo ya decidido sobre las pretensiones de las partes.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a las costas solicitadas por el demandante, el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil contempla esta posibilidad para aquella parte que resulta totalmente vencida, lo que no ocurre en autos respecto de la demandada, en virtud de lo dispuesto en el fundamento vigésimo sexto, razón por lo cual no se acogerá esta solicitud. A lo que cabe agregar, además, que atendido el monto solicitado como indemnización de perjuicios, en relación a aquel fijado por este sentenciador, solo cabe estimar que el Fisco de Chile ha litigado con motivo plausible.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 19 y 38 inciso 2° de la Constitución Política; los instrumentos internacionales citados en este fallo; los artículos 2332, 2492, 2497, 2515 y 2514, todos del Código Civil; las Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y los artículos 160, 170, 253 y siguientes, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432 y 433, todos del Código de



Procedimiento Civil; y demás normas que resulten pertinentes, **SE RESUELVE:**

I.- Que **se desestima la excepción de reparación integral del daño**, opuesta por el demandado en la contestación, en virtud de lo decidido en el motivo duodécimo.

II. Que **se desestima la excepción de prescripción extintiva** opuesta por el demandado en la contestación, en virtud de lo decidido en el apartado decimocuarto.

III. Que **se acoge parcialmente la acción indemnizatoria** entablada en autos por **Jorge Héctor Rufino Ruiz-Tagle Carrasco**, en conformidad con lo establecido en los basamentos décimo sexto al vigésimo sexto y, en consecuencia, se declara que se condena al **Fisco de Chile** a pagar al actor, la suma de **\$50.000.000 (cincuenta millones de pesos)**, a título de indemnización por daño moral, que deberá pagarse debidamente reajustada, con intereses corrientes a contar de que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

IV. Que **se desestima la defensa de la demandada relativa a la regulación de la indemnización cobrada**, según lo dispuesto en el numeral vigésimo octavo.

V. Que **se acoge, parcialmente, la defensa de la parte demandada relativa al cómputo de los reajustes e intereses cobrados**, según lo establecido en los motivos vigésimo séptimo y vigésimo octavo, y a lo decidido en el numeral III.

VI. Que **no se condena en costas al demandado**, en virtud de lo dispuesto en el apartado trigésimo segundo.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.

ROL: C-5.380 -2022.



**DICTADA POR DOÑA ISABEL EYZAGUIRRE FLORES,
JUEZA TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.**

